

Id. Cendoj: 47186370022014100273

Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Valladolid

Sección: 2

Nº de Resolución: 271/2014

Fecha de Resolución: 01/09/2014

Nº de Recurso: 617/2014

Jurisdicción: Penal

Ponente: MARIA DE LOURDES DEL SOL RODRIGUEZ

Procedimiento: PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:

ALZAMIENTO DE BIENES (TODOS LOS SUPUESTOS)

Idioma:

Español

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

VALLADOLID

SENTENCIA: 00271/2014

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 de VALLADOLID

Domicilio: C/ ANGUSTIAS S/N

Telf: 983 413475

Fax: 983 253828

Modelo: SE0200

N.I.G.: 47186 43 2 2010 0243884

ROLLO: APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000617 /2014

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 2 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000617 /2014

RECURRENTE: Julián , MINISTERIO FISCAL , Paula , Teresa

Procurador/a: CRISTOBAL PARDO TORON , CRISTOBAL PARDO TORON , CRISTOBAL PARDO TORON

Letrado/a: *****

RECURRIDO/A: Roberto , Valentín , Luis Andrés , Miguel Ángel

Procurador/a: *****

Letrado/a: , *****

Recurso de apelación: APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000617 /2014

Procedimiento Abreviado: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000617 /2014

Juzgado de origen: JDO. DE LO PENAL N. 2 de VALLADOLID

SENTENCIA N° 271/14

Ilmos. Sres. Magistrados

D. FELICIANO TREBOLLE FERNANDEZ

D. FERNANDO PIZARRO GACIA

DOÑA LOURDES DEL SOL RODRIGUEZ

En VALLADOLID, a uno de Septiembre de dos mil catorce.

La Audiencia Provincial, Sección 2ª de esta capital ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente procedimiento penal, dimanante del Juzgado de lo Penal numero Dos de Valladolid, por el delito de estafa, seguido contra DON Valentín , DON Luis Andrés , DON Roberto Y DON Miguel Ángel , siendo partes, como apelante el Procurador Sr. Pardo Torón, que interviene en representación de Doña Paula , Don Julián y Doña Teresa , personados como Acusación Particular en esta causa, y como apelados Don Valentín , representado por el Procurador Sr. Vaquero Gallego; Don Luis Andrés , representado por el Procurador Sra. Foronda Rodríguez; Don Roberto , representado por el Procurador Sra. Foronda Rodríguez; y Don Miguel Ángel , representado por el Procurador Sr. Vaquero Gallego y el Ministerio Fiscal, habiendo sido Ponente el Magistrado Doña LOURDES DEL SOL RODRIGUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal número Dos de Valladolid, con fecha 15 de Abril de 2014 dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos:

" **ÚNICO.-** Se declara expresamente, de acuerdo con la prueba practicada, que el día 31 de mayo de 2005, Paula , Julián y Teresa suscribieron con la entidad A*** U*****SL, cuyos administradores mancomunados eran el acusado Valentín , mayor de edad y sin antecedentes penales, y Luis Andrés , mayor de edad y sin antecedentes penales, un contrato que denominaron de cesión de finca con entrega de contraprestación en metálico y unidades inmobiliarias, que elevaron a

escritura pública y en cuya virtud los primeros cedían a la entidad reseñada, las fincas rústicas nº 7.118 y nº 6.416, sitas en el término municipal de Aldeamayor de San Martín, por el precio en metálico de 270.455,45€, -que los cesionarios recibieron en el momento de otorgamiento de la escritura-, y dos viviendas de la edificación que se proyectaba realizar, valoradas en 360.607,26€.

Del referido contrato resultaba que la entidad A*** U*****SL asumía el compromiso de elaborar y desarrollar el Plan Parcial Sector SUD 4 Aldeamayor de San Martín, elemento necesario para poder ejecutar la promoción, y se obligaba a construir las dos viviendas, con las características descritas en la cláusula tercera, en el plazo máximo de 24 meses contados desde la fecha de concesión de licencia municipal de obras (cláusula cuarta), y una penalización por retraso en la entrega (cláusula duodécima) .
(folios 20 a 31 consistente en la escritura de 31 de mayo de 2005)

El contrato establecía en su cláusula quinta que: "*Al objeto de cumplir todo lo pactado en la presente escritura, D^a Paula , D. Julián y D^a Teresa , facultan y autorizan a la SOCIEDAD " A*** U*****SL ", para agrupar las parcelas cedidas a otras colindantes propiedad de dicha sociedad, hipotecar el solar o el resultante de la agrupación y futuras construcciones, declarando las edificaciones y constituyéndolas en Régimen de Propiedad Horizontal, con la obligación de liberar de toda carga y gravamen, las unidades inmobiliarias que se entregarán a D^a Paula , D. Julián y D^a Teresa "*.

Además la entidad A*** U*****SL, como garantía del cumplimiento de sus obligaciones , entregó a los vendedores o cedentes una aval suscrito el 31 de mayo de 2005 con la entidad Caja Duero, aval nº 2005038961, y con vencimiento el 30 de mayo de 2008, por importe de 360.607,26€ en concepto de permuta de dos viviendas unifamiliares por compra finca registral nº 7118 y 6.415 del Registro de la Propiedad de Olmedo, aval que se renovaría anualmente, si transcurrida la fecha de vigencia de primer aval (30 de mayo de 2008) no se hubieran finalizado las obligaciones del contrato (cláusula decimocuarta).

El 29 de mayo de 2008 los cedentes, ante la no entrega de las unidades inmobiliarias, requirieron a la entidad A*** U*****SL para que renovaran el aval, que fue contestado por el administrador mancomunado Luis Andrés , requerimiento que fue reiterado el 2 de julio de 2008, sin que fuera atendido por cuanto la entidad Caja Duero no renovó a A*** U*****SL el referido aval, como consecuencia de la situación financiera de la entidad A*** U*****SL.

El Parcial Sector SUD 4 del P.G.O.U de Aldeamayor de San Martín fue aprobado por el Ayuntamiento el 29 de octubre de 2007 y el 18 de agosto de 2008 se aprobaron los estatutos de la Junta de Compensación del Sector SUD 4, si bien no llegó a presentarse Proyecto de Actuación ni a constituirse la Junta de Compensación.

El 22 de agosto de 2008 los administradores mancomunados de la entidad A*** U*****SL, ante el vencimiento de la cuenta de crédito nº 2066- 0157-0310000340 abierta el 31 de mayo de 2005 en la entidad Caja de Ahorros de Santander y Cantabria para la señalización y compra del suelo (las fincas rústicas) que se destinarían al proyecto de edificación de viviendas unifamiliares en el Sector SUD 4 del Plan Parcial de Aldeamayor de San Martín, y la necesidad de refinanciar la deuda existente, constituyeron una hipoteca sobre las fincas registrales nº 6.690, 5.908, 5.927, 7.118 y 6416, de las que A*** U*****SL era propietaria, en garantía del préstamo hipotecario concedido por la entidad Caja de Ahorros de Santander y Cantabria a A***

U*****SL por importe de 1.950.000€ préstamo que se destinó a cancelar la cuenta de crédito referida que tenía un saldo deudor de 1.931.250,50€ y el resto del mismo (18.749,50€) al pago de las comisiones, gastos e impuestos derivados del préstamo, constituyéndose como garantía de devolución del préstamo, además de la hipoteca, el afianzamiento solidario, en la forma que consta en el contrato de préstamo, del acusado Roberto , mayor de edad y sin antecedentes penales, el acusado Luis Andrés y la entidad Hormigones Saldaña, cuyo administrador era Sergio .

Que a fecha de hoy la entidad A*** U*****SL no ha cumplido la obligación de entregar a los vendedores cedentes, Paula , Julián y Teresa , las dos unidades inmobiliarias valoradas en 360.607,26€, que constituían parte de la contraprestación del contrato de 31 de mayo de 2005.

No consta que el acusado Miguel Ángel fuera socio a título personal de la entidad A*** U*****SL ni que hubiera tenido participación alguna en la escritura de 31 de mayo de 2005 ni en la escritura de préstamo hipotecario de 22 de agosto de 2008."

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:

" **Absolviendo** a Valentín , a Luis Andrés , a Roberto y a Miguel Ángel del delito de estafa por el que se les acusaba, con todos los pronunciamientos favorables, con expresa condena a la acusación particular a las costas causadas a cada uno de los acusados."

TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por el Procurador Sr. Pardo Torón, en representación de Doña Paula , Don Julián y Doña Teresa , dándose traslado del recurso al Ministerio Fiscal y a las representaciones de Don Valentín , Don Luis Andrés , don Roberto y don Miguel Ángel quienes, en el plazo concedido al efecto, presentaron escritos de impugnación de la apelación.

CUARTO.- Como fundamentos de impugnación de la sentencia, se alegaron sustancialmente los siguientes: Error en la apreciación de las pruebas e infracción de diversas normas del ordenamiento jurídico.

HECHOS PROBADOS

Se admiten y esta Sala hace propios en lo sustancial los hechos declarados probados por la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación de Doña Paula , Don Julián y Doña Teresa se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número Dos de Valladolid, en la que se dicta un pronunciamiento absolutorio respecto de Don Valentín , Don Luis Andrés , don Roberto y don Miguel Ángel , con imposición expresa a la Acusación Particular de las costas procesales causadas a los acusados.

En el escrito de impugnación de la apelación presentado por la representación de Don Valentín (al que se remite la representación de Don Miguel Ángel) se alega previamente la imposibilidad, conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, de que se proceda en segunda instancia a la

revocación de una sentencia absolutoria, ya que para ello sería precisa la práctica de prueba en apelación.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desde la sentencia del caso Ekbatani contra Suecia de 28 de Mayo de 1988 ha venido argumentando que el Tribunal que conoce el recurso que haya de resolver sobre cuestiones de hecho y de derecho, no puede por motivos de equidad del proceso, adoptar una decisión sin la apreciación directa del testimonio del acusado que ha negado la comisión del hecho delictivo que se le imputa (STEDH 16 de Noviembre de 2010, caso García Hernández contra España , STEDH 25 de Octubre de 2011, caso Almenara Álvarez contra España , entre otras), añadiendo a este criterio el examen de los testigos cuando sus testimonios deban ser valorados para resolver los hechos cuestionados (STEDH de 22 de Noviembre de 2011, caso Lacadena Calero contra España , entre otras).

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a raíz de la sentencia 167/02 de 18 de septiembre , dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, establece que "en el recurso de sentencias absolutorias, cuando aquel se funda en la apreciación de la prueba, si en apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia cuando por la índole de las mismas es exigible inmediación y contradicción". Este criterio ha sido reiterado por la STC 126/2012 de 16 de Junio y por la STC (Pleno) de 11 de Abril de 2013 , que considera contrario a un proceso con todas la garantías que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación, como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija, necesariamente, que se practiquen en presencia del órgano judicial que las valora, como es el caso de las declaraciones de acusados, testigos y peritos.

En esta misma línea la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 señala que la prueba producida en el juicio oral es inmune a la revisión en vía de recurso en lo que depende de la inmediación (SSTC 37/88, de 3 de marzo ; 12/02, de 28 de enero y 212/02, de 11 de noviembre ; y STS 23 de marzo de 1999). En esta sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el segundo fundamento de derecho se indica: "En definitiva, no puede revisarse la sentencia de instancia, en atención a las declaraciones de acusado y testigos, ya que una nueva valoración de las mismas se llevaría a cabo sin la percepción sensorial derivada de la inmediación, que sí dispuso el Juzgado de instancia". En esta misma línea se han pronunciado las STS de 15 de Abril de 2014 y 10 de Julio de 2014 indicando que "los márgenes de nuestra facultad de revisión de sentencias absolutorias, a través del cauce casacional de infracción de ley, con intervención de la defensa técnica pero sin la audiencia personal del reo, son claros, al menos, mientras no se produzcan nuevas disgresiones jurisprudenciales que modifiquen el criterio establecido. Estos márgenes se concretan en la corrección de errores de subsunción a partir de elementos fácticos reflejados en el relato de hechos probados, sin verificar ninguna nueva valoración de la prueba practicada en la instancia".

En consecuencia, "se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías cuando el Tribunal que ha de resolver un recurso frente a una sentencia absolutoria, revisa y corrige la valoración y ponderación realizada por el Juez de primera instancia de las declaraciones sin respetar los principios de inmediación y contradicción, siendo ello necesario para pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia " (STC de 9 de febrero de 2004).

Así pues, el Tribunal de apelación puede valorar la prueba, coincidiendo o no con la

apreciación del Juez de primera instancia, pero tratándose de la declaración del acusado o de prueba testifical o pericial que exigen inmediación, sólo puede llevar a cabo una nueva y distinta valoración si se cumplen las exigencias aludidas de haberse practicado tales pruebas en su presencia y en condiciones de inmediación y contradicción. Este criterio jurisprudencial supone la prohibición de revocar la sentencia absolutoria dictada en la instancia basada en la apreciación de pruebas personales cuando no se hayan realizado este tipo de pruebas en la alzada. Ni tan siquiera mediante el visionado de la grabación del acto del juicio, es posible revisar en segunda instancia la valoración de las pruebas de carácter personal efectuadas por el Juez a quo (STC de 18 de mayo de 2009).

No ocurre lo mismo cuando el debate planteado en el recurso sea de naturaleza estrictamente jurídica, de tal forma que, como indica la STS de 2 de Abril de 2013 , si el debate planteado en segunda instancia versa exclusivamente sobre cuestiones jurídicas, ya sea por la configuración legal del recurso, ya sea por los concretos motivos que fundamentan la solicitud de agravación de condena planteada por los acusadores, para su resolución no resulta necesario oír personalmente al acusado en un juicio público, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adoptarse, sino que el tribunal ad quem puede decidir adecuadamente sobre la base de lo actuado. En tales supuestos, en cuanto el debate sea estrictamente jurídico, la posición de la parte podría entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado, en quien se encarnaría la efectividad del derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte (SSTC 153/2011 de 17 de Octubre y 201/2012 de 12 de Noviembre). De igual forma, no se produce el quebranto del derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena pronunciada en apelación o la agravación de la situación, a pesar de no haberse celebrado vista pública, tiene su origen en las pruebas documentales o en pruebas periciales documentadas o en discrepancias con la valoración de pruebas indiciarias, de forma que el órgano judicial se limite a rectificar la inferencia realizada por el de instancia a partir de unos hechos que resultan acreditados en ésta (STC Pleno 88/2013 de 11 de Abril).

El recurrente en el Segundo Otrosí de su escrito de apelación, no solicitó expresamente la celebración de vista, interesando la reproducción de la prueba grabada, concretándola en las declaraciones de Don Valentín y Don Miguel Ángel , lo que evidencia que, si bien la valoración de los hechos se realiza fundamentalmente por el análisis de los documentos incorporados a la causa, éste ha de hacerse poniendo en relación dichas documentales con las pruebas personales practicadas en el juicio oral, concretamente los interrogatorios de los intervinientes en los documentos que son objeto de análisis para determinar si, efectivamente, concurre el elemento subjetivo que configura el delito previsto en el artículo 251.1 del Código Penal , que exige, según precisa la SS de 29 de Marzo de 2012 que "el sujeto conozca que efectivamente carece de las facultades que se atribuye sobre la base de las cuales dispone del bien que se trate", por lo que no sería posible que, en apelación, se revocara este pronunciamiento absolutorio, ya que el mismo depende de la valoración de pruebas personales practicadas por el Juez de instancia.

SEGUNDO.- Consideran los recurrentes, única parte que solicitó un pronunciamiento condenatorio, ya que el Ministerio Fiscal solicitó la libre absolución de todos los acusados, que los hechos objeto de enjuiciamiento son constitutivos, conforme a las conclusiones definitivas formuladas en el juicio oral, de un delito de estafa del artículo 251.1 del Código Penal , y que por tanto el Juzgador de instancia no ha valorado correctamente las pruebas practicadas, estimando que el contrato celebrado en escritura publica de 31 de Mayo de 2005 entre Doña Paula , Don Julián y Doña Teresa de una

parte, y la entidad A*** U*****S.L. representada en dicho acto por sus Administradores Mancomunados, Don Valentín y Don Luis Andrés , es un contrato atípico y mixto que en parte se configura como una compraventa y en parte como una permuta y que, contrariamente a lo indicado en la sentencia de instancia, dicho contrato no contiene ninguna autorización a la entidad A*** U*****S.L. para hipotecar las fincas 7118 y 6416 que fueron objeto del citado contrato de 31 de Mayo de 2005, en el que se pactó como contraprestación a la cesión de las indicadas fincas el abono en metálico de 270.455'45 euros, que fueron recibidos con anterioridad al otorgamiento de dicha escritura, y dos viviendas pareadas cuyas características se detallan, correspondientes a la construcción que la entidad A*** U*****S.L. iba a llevar a cabo, valorándose las dos fincas a entregar (que debían serlo libres de toda carga o gravamen) en la cantidad de 360.607'26 euros. En dicho acto se entregó a los cedentes un aval por este último importe, que tenía como fecha de duración hasta el 30 de Mayo de 2008, pactando que si a esta última fecha no se hubiera dado cumplimiento a la obligación de entrega de las viviendas, se renovaría dicha garantía anualmente hasta el cumplimiento de la obligación. El día 22 de Agosto de 2008 la entidad A*** U*****S.L. hipotecó las dos fincas reseñadas en garantía de un préstamo de Caja Santander y Cantabria por un importe de 1.950.000 euros, para cancelar el saldo deudor de su cuenta de crédito, considerando los recurrentes que, atendiendo al texto de la escritura pública de 31 de mayo de 2005, la entidad cesionaria no podía constituir este gravamen, ya que ni se trataba de un solar, entendido este concepto conforme a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León , ni las fincas se habían agrupado con otras colindantes propiedad de la sociedad, que es lo que entienden la recurrente que permitía la constitución del gravamen, considerando que de la lectura conjunta del contrato se desprende la existencia de una expresa prohibición de hipotecar para la sociedad A*** U*****S.L.

Como se ha indicado en el Fundamento de Derecho anterior, el delito tipificado en el artículo 251.1 del Código Penal exige que el sujeto activo del mismo conozca que no tiene facultad para la realización del acto de gravamen del bien, en este caso, para la constitución de la hipoteca, de tal forma que, si el sujeto activo creía, erróneamente, que ostentaba la necesaria facultad de disposición, no concurriría el tipo subjetivo (STS de 2 de Marzo de 2011) y, en este punto, la interpretación que hace la Juez de instancia respecto de la Estipulación Quinta de la escritura pública de cesión de 31 de Mayo de 2005 no es ilógica ni irracional, atendiendo al contenido íntegro del contrato y al total de la operación que A*** U*****S.L. pretendía realizar, puesto que expresamente los cedentes autorizan a la entidad cesionaria a "agrupar las parcelas cedidas a otras colindantes propiedad de dicha sociedad, hipotecar el solar o el resultante de la agrupación y futuras construcciones..." sin que el sentido de esta estipulación indique que el término "solar" haya de ser interpretado necesariamente, como considera la recurrente, en la forma que es definido por el artículo 24 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León , ya que también puede ser entendido como sinónimo de suelo y, como indicó el Ministerio Fiscal en su informe en el juicio oral, esta autorización para la constitución de la hipoteca se constituye como uno de los procedimientos precisos para financiar un proyecto de ejecución de unas viviendas que comprendía, no solamente las fincas cedidas por los denunciantes, sino también otras que ya habían sido adquiridas por la entidad cesionaria y, a este mismo fin, se autorizó también la agrupación de las fincas por la cesionaria.

Por lo expuesto, se considera que la valoración que se hace por la Juez de instancia es correcta, que del contenido del contrato de cesión de 31 de Mayo de 2005 se desprende la existencia de una autorización para constituir una hipoteca o que, al menos, a los fines de la única infracción por la que se ha formulado acusación, la entidad cesionaria pudo

interpretar que la estipulación quinta le autorizaba para la constitución de este gravamen, y por ello no concurre en ningún caso el elemento subjetivo del injusto que configura el delito del artículo 251.1 del Texto Sustantivo, procediendo la confirmación del pronunciamiento absolutorio que se contiene en la resolución impugnada.

TERCERO.- La sentencia de instancia impone a la Acusación Particular el pago de las costas procesales de los cuatro acusados, condena que es posible al amparo de lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe".

Al respecto, la STS de 19 de Octubre de 2011 indica que para considerar que concurre en la Acusación Particular esta temeridad o mala fe es preciso que "perturbe con sus pretensión el normal desarrollo del proceso penal, que sus peticiones sean reflejo de una actuación procesal precipitada, inspirada en el deseo de poner el proceso penal al servicio de fines distintos a aquellos que justifican su existencia", no siendo suficiente a estos efectos el simple dato de la disparidad entre el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, ya que el que el Ministerio Fiscal solicite la libre absolución no significa que toda pretensión acusatoria de la Acusación Particular sea inconsistente (STS de 30 de Enero de 2006). La misma resolución citada entiende que el sostenimiento de una acusación hasta la sentencia absolutoria ha pasado toda una serie de filtros judiciales que impedirían apreciar temeridad y mala fe, ya que se comprende tanto la resolución de admisión a trámite de la querella, que supone un primer filtro frente a imputaciones manifiestamente infundadas, como aquellas actuaciones posteriores en la fase de instrucción hasta el momento de la decisión sobre la apertura del juicio oral, de tal forma que "la sentencia absolutoria no puede convertirse en la prueba ex post para respaldar una temeridad que, sin embargo, ha pasado todos los filtros jurisdiccionales".

En este supuesto, la Juez de instancia distingue entre el acusado Don Roberto y Don Miguel Ángel , que no intervinieron en la escritura de constitución de préstamo hipotecario (el primero de ellos únicamente lo hizo en calidad de fiador solidario, habiendo resultado por tanto también perjudicado) que es precisamente la acción a la que se refiere el delito por el que se ha formulado acusación, y en relación con Don Valentín y don Luis Andrés puesto que el auto de la Audiencia Provincial de 27 de Febrero de 2012 obligaba al esclarecimiento de los hechos, práctica de las diligencias que se estimen oportunas y dictado en su caso del auto de imputación, sin que se practicara ninguna otra diligencia, presentado la Acusación Particular su escrito de calificación acto seguido del dictado del auto de imputación.

Pero lo cierto es que el auto de transformación de 27 de Febrero de 2012 de forma expresa se refiere a la calidad de imputados del Sr. Valentín y del Sr. Luis Andrés por ser socios y administradores de la sociedad cesionaria e intervinientes en el otorgamiento de la escritura pública de constitución del préstamo hipotecario y, en relación con Don Roberto , se justifica su imputación por ser socio de la mercantil y haber comparecido al otorgamiento de la escritura de constitución de hipoteca, y en relación con Don Miguel Ángel , por ser socio de la entidad, haber recibido el requerimiento de los querellantes de 2 de julio de 2008 y figurar con apoderado con amplios poderes en la sociedad desde el año 2005, y es precisamente contra estos cuatro imputados contra los que se dirigió la acusación.

Hay por tanto unos indicios que se derivan tanto del auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial revocando el sobreseimiento provisional acordado por el Juez de Instrucción, como de la justificación del auto de transformación en cuanto a la imputación de los que finalmente fueron acusados, por lo que, en la línea de lo indicado por la STS de

19 de Octubre de 2011 citada, no puede considerarse que concurra en la Acusación Particular la temeridad o mala fe precisa para la imposición de las costas de los acusados que resultaron finalmente absueltos, por lo que es procedente la estimación del recurso en este punto, debiendo dejarse sin efecto este pronunciamiento de la sentencia impugnada, declarando de oficio las costas de la primera instancia.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , procede declarar de oficio las costas de esta alzada al estimarse parcialmente el recurso de apelación formulado.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que **estimando parcialmente** el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Pardo Torón, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número Dos de Valladolid el día 15 de Abril de 2014 en el procedimiento de que dimana el presente rollo, procede la confirmación de la misma excepto en lo relativo a la imposición de las costas de los acusados a la Acusación Particular, que se declaran de oficio por no concurrir temeridad o mala fe, con declaración de oficio de las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme y contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos, para su cumplimiento, y una vez se reciba su acuse archívese el presente, previa nota en los libros.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.